



REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-015-2021-00539-01
Demandante:	Mary Luz Pulgarín Sánchez
Demandado	Estella Cortés Rodríguez y Libia Restrepo Pérez
Asunto:	Apelación auto que no decreta prueba
Procedencia:	Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Tema	Decreto de pruebas

Medellín, febrero dieciséis (16) de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la codemandada Estella Cortés Rodríguez, contra el auto proferido por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, en audiencia pública celebrada el 1° de diciembre de 2022, por medio de la cual se denegó el decreto de la prueba de expedición de oficio, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por la señora MARY LUZ PULGARÍN SÁNCHEZ en contra de las señoras ESTELLA CORTES RODRIGUEZ y LIBIA RESTREPO PÉREZ. Radicado 0500131-05-015-2021-00539-01.

1.- ANTECEDENTES

La señora MARY LUZ PULGARÍN SÁNCHEZ convocó a juicio laboral a las señoras ESTELLA CORTEZ RODRIGUEZ y LIBIA RESTREPO PÉREZ; pretendiendo se ordene el pago de la prima de servicios del 22 de mayo de 2019 al 22 de mayo de 2020, la prima de diciembre de 2020; el pago de las vacaciones; los intereses a las cesantías; los aportes al sistema de seguridad social; horas extras; saldos insolutos y la sanción por la no consignación a un fondo privado de cesantías.

Al dar respuesta a la demanda, la señora Estella Cortes Rodríguez, se opuso a la prosperidad las pretensiones de la demanda. Por su parte, la codemandada Libia Restrepo Pérez, no dio respuesta a la demanda.

1.1.- DECRETO DE PRUEBAS

En la audiencia pública de que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, celebrada el 1º de diciembre del año 2022, el Juzgado de conocimiento, dentro de la etapa del decreto de pruebas y en relación a las solicitadas por la codemandada Estela Cortes Rodríguez, decretó la documental, el interrogatorio de parte a la demandante y la testimonial.

En uso de la palabra el apoderado de la demandada, indicó que con la contestación de la demanda se realizó una solicitud de expedición de oficio, respecto de la cual no se pronunció el Despacho.

La señora Juez Quince Laboral del Circuito de Medellín, consideró que, en el escrito de contestación, no se elevó ninguna solicitud de emisión de oficio, considerando adicionalmente, que el mismo no resulta necesario para resolver el litigio.

1.2.- RECURSO

El apoderado de la señora Estella Cortés Rodríguez, interpuso recurso de apelación, señalando que en la demanda se dice “oficios”, lo que es una petición clara de expedición de oficios, considerando que la prueba, por lo menos ante la entidad bancaria es importante, a no ser que en el proceso se aceptara que esa cuenta es efectivamente de la señora Moreno.

1.3. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para formular alegatos, se pronunció el apoderado recurrente, aclarando que no solicitó a la juez utilice sus facultades oficiosas para decretar una prueba no pedida, lo solicitado, es que se oficie al Banco de Colombia, a fin de probar la existencia de una cuenta en dicha entidad y la posición de su representada en ella, reiterando la importancia de la prueba a fin de determinar que no existió relación laboral alguna de esta última con la demandante.

Adujo que la petición de pruebas en un derecho fundamental, con íntima relación al debido proceso, las cuales no pueden negarse sino de acuerdo con las normas procesales y en una decisión debidamente fundamentada, considerando que el criterio del despacho no tiene sustento de ninguna clase y va en contra de la misma normatividad que ordena sustentar toda decisión judicial así sea sucintamente.

2. CONSIDERACIONES

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de **Apelación**, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66 A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

2.1.- PROBLEMA JURÍDICO:

El problema jurídico a dirimir, radica en verificar

¿Si es procedente adicionar el auto proferido en audiencia pública el 1º de diciembre de 2022, por la Juez Quince Laboral del Circuito de Medellín, para en su lugar, decretar la prueba solicitada mediante oficio, verificando para tal fin, si en efecto, se presentó solicitud en dicho sentido?

2.2. TESIS

El anterior problema jurídico, se resuelve bajo la tesis según la cual, de la interpretación integral de la demanda, específicamente del acápite de pruebas, refulge clara la solicitud probatoria de expedición de oficios, además de que se acredita una gestión preprocesal de la parte para conseguir la información solicitada, razón por la cual, resulta procedente el decreto de la prueba resaltando que la misma es útil, conducente y necesaria, razón por la cual debe REVOCARSE el auto apelado, atendiendo a las siguientes razones:

2.3. PREMISAS NORMATIVAS

De conformidad con el artículo 164 del Código General del Proceso, aplicable al caso por remisión expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social *“Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho.”*

El artículo 167 del Código General del Proceso, atribuye a las partes la carga procesal de “probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

En esta perspectiva toda persona tiene derecho a “presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra” como una garantía propia del debido proceso, regulado en el artículo 29 de la Constitución Política.

2.4. CASO CONCRETO

En el asunto bajo estudio, se tiene que la codemandada Estella Cortés Rodríguez, al replicar la demanda, solicitó en el acápite de pruebas, para lo que interesa al recurso, las siguientes:

*“Documentales: (...) **15.** Comunicación enviada a Bancolombia, solicitando constancia de la posición de la señora ESTELA CORTES, con C.C. 21.321.366, en la cuenta 10172535533. **16.** Comunicación enviada a la EPS Savia Salud, con el objeto de que certifiquen si la señora MORENO con cédula de ciudadanía N° 21.321.896. se encuentra vinculada a la EPS y en caso positivo se expida copia de la historia clínica de la misma. **17.** Comunicación de la señora ROCIO HENAO de marzo 6 de 2020 comunicándole a su empleadora la existencia de algunas obligaciones y su forma de pago.*

La prueba documental presentada antes de la vinculación de la demandante tiene como objeto probar que siempre las vinculaciones han sido hechas por las señoras MORENO, incluso hasta el momento en que a mi asistida no siguió prestando el servicio del retiro de la cuenta de LIA MORENO a fin de ponerla a disposición de ROCIO HENAO SEGÚN EL MONTO DE GASTOS QUE SE LE INFORMARA. Los documentos de 2020 dan cuenta de quién era realmente el empleador. Los oficios a fin de probar el estado de salud, la existencia de la cuenta en Bancolombia y la posición de ESTELA CORTES en dicha cuenta”.

De la lectura de lo anterior, se advierte que, ciertamente, la redacción de la petición no resulta muy afortunada, en tanto no se solicita de manera expresa se expidan oficios a las entidades reseñadas Bancolombia S.A. y EPS Savia Salud, sin embargo, de la lectura íntegra del acápite es posible deducir que la pretensión del apoderado de la codemandada es que se solicite a las referidas

entidades la información reseñada, explicando incluso la finalidad de la prueba, de manera que las falencias en claridad en la comunicación escrita del apoderado, no pueden convertirse en barrera para que el juez, atendiendo a sus deberes de interpretación, desentrañe la voluntad de la parte, tal y como desde antaño lo ha adocinado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias como la SL22923 de 2005.

Resalta la Sala, que la mención a los oficios que realiza la parte llamada a resistir las pretensiones, se encuentran dentro del mismo acápite de pruebas, presentándose distinción al momento de relacionar la prueba, pues nótese que en los numerales 15 y 16 de las documentales se enlistan como “comunicación” y en la parte final de la petición se refiere a la finalidad de la prueba mediante oficios, siendo igualmente clara la parte en indicar cuál es el objeto y la relevancia de la prueba.

De otra parte, destaca este Juez Plural, que el inciso tercero del artículo 173 del Código General del Proceso, al respecto dispone:

“El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente.”

Disposición que está en armonía con el deber que asigna a los apoderados de las partes, el numeral 10 del artículo 78 del Código General del Proceso, en el que se define como tal el de “*abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir*”

Desde esta óptica, en principio, de acuerdo con el deber impuesto a los litigantes correspondía a la demandada, adelantar las gestiones tendientes a

obtener la certificación de la entidad financiera y de la EPS, sobre los puntos de interés en su defensa frente a las pretensiones promovidas en su contra, carga que en efecto fue cumplida y de ello da cuenta los documentos obrantes a folios 126 a 129 del anexo 13 del expediente digital.

Por lo anterior, considera esta judicatura que es procedente decretar la prueba, en relación al oficio a Bancolombia, que toda vez que la información que se pretende allegar al proceso a través del oficio, requiere solicitud judicial al estar protegida por la Ley 1266 de 2008, de habeas data, tratándose de datos personales, no solo de la propia demandada, sino de un tercero como lo es la señora Lía Moreno, consagra el artículo 4 de la citada normativa:

“Todas las personas naturales o jurídicas que intervengan en la administración de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende la administración de datos, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de la misma”.

Por su parte, el artículo 5° de la referida ley, relativo a la circulación de la información, precisa a que personas puede ser entregada o puesta a disposición la información personal, recolectada o suministrada en bases de datos, así:

- “a) A los titulares, a las personas debidamente autorizadas por estos y a sus causahabientes mediante el procedimiento de consulta previsto en la presente ley.*
- b) A los usuarios (entiéndase titular) de la información, dentro de los parámetros de la presente ley.*
- c) A cualquier autoridad judicial, previa orden judicial.*
- (...)”*

Resaltando que si bien, la señora Estella Cortés Rodríguez, está legitimada para solicitar la información, esto es, si comparte la propiedad de la cuenta de ahorros N 10172535553, lo cierto del caso, es que la parte demandada, no cuenta con una etapa pre procesal que le permita el estudio y construcción de la tesis de defensa, como si ocurre con la parte activa quien solo está limitada por el término de prescripción para presentación de la demanda, pues el extremo pasivo, una vez notificado de la demanda, solo cuenta con el término de diez días hábiles para dar contestación a la misma tratándose de procesos ordinarios laborales, de manera que no le es materialmente posible aportar los documentos que solicite en el ejercicio del derecho de petición, dado que conforme al artículo 2º de la Ley 1755 de 2015, ley estatutaria del derecho de petición, el término de respuesta general del derecho de petición es de 15 días hábiles o de 10 días hábiles cuando se trata de solicitudes de información y copia de documentos.

Por lo anterior, en criterio de la Sala, es necesaria la intervención del Juez, para que la información requerida por medio de oficio, pueda ser arrimada al proceso, además que la misma guarda pertinencia con la tesis de defensa que plantea la parte demandada y, en consecuencia, se adicionará el auto de pruebas para en su lugar, decretar el oficio con destino a Bancolombia.

En otro orden de ideas se considera que la prueba de oficio dirigido a Bancolombia es conducente y pertinente al objeto del litigio, en tanto, conforme a la respuesta al hecho primero de la demanda y la excepción de “inexistencia de legitimación por pasiva”, la defensa de la codemandada se apoya en el argumento de que realizaba una gestión gratuita en favor de la señora Lia Moreno, que en su versión, solo consistía en el retiro de dineros de la citada cuenta de Bancolombia para el pago de los gastos del hogar, sin que tuviera relación directa con la hoy demandante.

No ocurre igual en relación al oficio dirigido a Savia Salud EPS, pues se considera que el mismo no resulta pertinente, en tanto que solo se solicita información relativa a la señora Lía Moreno, quien no es parte en el proceso y en tal sentido, no resulta útil, ni conducente levantar la reserva de la historia clínica, para establecer su situación de salud, la cual no está en discusión.

3. DECISION

De conformidad con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,

RESUELVE

PRIMERO: Se **ADICIONA** la decisión apelada proferida en audiencia pública celebrada el 1° de diciembre de 2022, por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral promovido por la señora MARY LUZ PULGARÍN SÁNCHEZ en contra de las señoras ESTELA CORTEZ RODRIGUEZ y LIBIA RESTREPO PÉREZ, en el sentido de decretar la prueba solicitada a mediante oficio, así:


Oficiar a Bancolombia S.A., a fin de que certifique si la señora Lía Moreno, identificada con cédula de ciudadanía N° 21321896, posee en Bancolombia, la cuenta de ahorros N° 10172535553 y si la señora Estella Cortes Rodríguez, identificada con cédula de ciudadanía N° 21321366, comparte la propiedad de tal cuenta o simplemente aparece como autorizada en la misma, desde que fecha y hasta que fecha. Asimismo, para que remita copia de los movimientos bancarios de la cuenta referenciada correspondiente a los años 2019 y 2020.


SEGUNDO: Sin Costas en esta instancia.

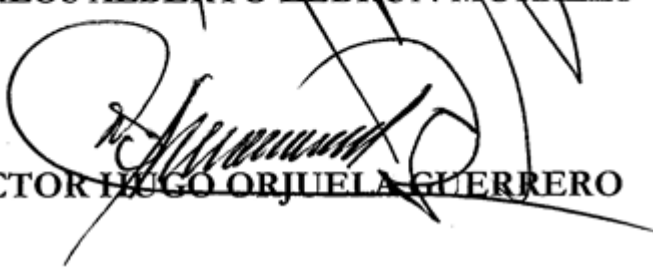
TERCERO: Se ordena la devolución del expediente digital al Juzgado de Origen.

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**, de conformidad con el numeral segundo del literal c) del artículo 41 del Código Sustantivo del Trabajo.

Los Magistrados,


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

La presente providencia fue notificada por estado No.27 fijado en la secretaría de la sala del Tribunal Superior de Medellín, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 17 de FEBRERO de 2023.

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS

Secretario